



Radicado U 2025080544922

Fecha 15/08/2025

Tipo AUTO



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Republica de Colombia

AUTO

“Por medio del cual se deja sin efecto el Auto No 2025080544681 del 01 de agosto de 2025, por medio del cual se declara abierto el periodo probatorio, se decreta pruebas y se corre traslado para la presentacion de alegatos de conclusión”

ACTUACION ADMINISTRATIVA No	0941-2020
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	GRANERO EL PAISAJE TUTUMEÑO
DIRECCION DE LA APREHENSION	CALLE 20 N° 19 - 72
MUNICIPIO	NECOCLI – ANTIOQUIA
INVESTIGADO	DAGOBERTO HERNANDEZ CARO
IDENTIFICACION	C C 8 429 239
INVESTIGADO	JUAN BERRIO SALGUEDO
IDENTIFICACION	C C 8 332 612

La Secretaria de Despacho de la Secretaria de Hacienda del departamento de Antioquia en ejercicio de las facultades legales y reglamentarias consagradas conforme al articulo 168 de la Ordenanza n° 029 de 2017 [Asamblea Departamental de Antioquia], ***“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”***, en concordancia con el articulo 24 y siguientes de la Ley 1762 de 2015 y la Ley 223 de 1995, y las demas normas complementarias,

CONSIDERANDO

- 1 Que conforme a lo establecido en el articulo 168 de la Ordenanza n° 029 de 2017, el cual remite por competencia para tramitar las actuaciones administrativas de lo relacionado con el procedimiento de impuesto al consumo, el cual reza asi

Articulo 168 PROCEDIMIENTO Las actuaciones administrativas a traves de las cuales se investiga y sanciona la contravención descrita en el ordinal i del literal a del numeral 4 del articulo 152 de la presente ordenanza se tramitarán siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 24 de la Ley 1762 de 2015

- 2 Que los articulos 199 y 221 de la Ley 223 de 1995, otorgan competencia a los departamentos y el Distrito Capital de Bogota, para realizar, por medio de los organos de la administracion fiscal la fiscalizacion liquidacion oficial cobro y recaudo del impuesto al consumo de cervezas, refajos y mezclas de bebidas fermentadas o bebidas no alcoholicas, de licores, vinos, aperitivos, y similares, y de cigarrillos y de tabaco
- 3 Que los articulos 200 y 222 de la Ley 223 de 1995, otorgan competencia a los departamentos y el Distrito Capital de Bogota, la facultad de aprehender y decomisar en sus respectivas jurisdicciones a traves de las autoridades competentes los productos sometidos al impuesto al consumo de cervezas, refajos y mezclas de

4

11/5 et



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

AUTO

bebidas fermentadas o bebidas no alcohólicas, de licores, vinos, aperitivos, y similares, y, de cigarrillos y de tabaco elaborado, que no acrediten el pago del impuesto, o cuando se incumplan las obligaciones establecidas a los sujetos responsables

- 4 Que siendo la Ley 1762 de 2015 una norma de orden público es imperativo para el departamento de Antioquia adoptar las sanciones por evasión del impuesto al consumo del que trata la Ley 223 de 1995, así como el procedimiento para la imposición de las mismas
- 5 Según lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1762 de 2015 "Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal", en su capítulo CAPITULO II, indica lo siguiente

REGIMEN SANCIONATORIO COMUN PARA PRODUCTOS SOMETIDOS AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS SIFONES Y REFAJO AL IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES Y AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO SANCIONES

()

ARTICULO 24 Procedimiento para mercancías cuya cuantía sea superior a 456 UVT Las sanciones de decomiso de la mercancía cierre del establecimiento de comercio suspensión o cancelación de las licencias autorizaciones concesiones y registros y las multas establecidas en los artículos 15 a 19 de la presente ley se impondrán de acuerdo con el siguiente procedimiento

El funcionario encargado de la función de fiscalización de oficio o a solicitud de parte adelantará las averiguaciones preliminares que culminarán con un informe presentado al Secretario de Hacienda del departamento o del Distrito Capital quien proferirá pliego de cargos, cuando corresponda en el que señalará con precisión y claridad los hechos que lo originan las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados Contra esta decisión no procede recurso

()

- 6 El artículo 29 de la Constitución Política Nacional dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado en las actuaciones que se desarrollen contra los particulares Así, por ejemplo, la Sentencia T - 391 de 1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo alcance en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales para agotar el respectivo trámite

[Firma]



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

AUTO

- 7 El debido proceso se ve afectado cuando el funcionario judicial o el instructor del procedimiento administrativo sancionatorio se aparta del proceso legalmente establecido, ya sea porque sigue un proceso distinto al aplicable o porque omite una etapa sustancial del mismo, lo cual desconoce el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso. De acuerdo con la Sentencia SU -159 de 2002, este último evento se presenta cuando la ausencia de una etapa procesal o de alguna formalidad desconoce las garantías previstas en la ley para los sujetos procesales, de forma tal que, por ejemplo, se impide que

(i) puedan ejercer el derecho a una defensa técnica que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado - en los eventos en los que sea necesario - ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes para sustentar su posición (ii) se les comuniquen de la iniciación del proceso y se permita su participación en el mismo y (iii) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez que de acuerdo con la ley deben serles notificadas entre otras

- 8 En este sentido, la Corte ha señalado que en todo proceso judicial o administrativo es constitucionalmente imperioso que la persona contra la cual se dirige un cargo o acusación pueda hacer frente a los reproches formulados en su contra y que los argumentos que presente se consideren en la respectiva actuación judicial o administrativa, pues esto no solo sirve al interés individual del mismo, sino también al esclarecimiento de la verdad.
- 9 De ahí que, independientemente de que la actuación administrativa se inicie en cumplimiento de un deber constitucional o de oficio, todas las garantías constitucionales son exigibles, pues ese hecho no afecta su naturaleza, ni podrá entenderse que los obligados tengan restricciones en cuanto al contenido y alcance del derecho al debido proceso administrativo, por lo que corresponde a las autoridades promover y garantizar los derechos de las personas (artículo 2° de la C P). En efecto, uno de los contenidos del derecho al debido proceso se circunscribe a que las personas conozcan y comprendan el trámite administrativo en el que se encuentran involucradas.
- 10 Por tanto, las autoridades administrativas deben garantizar en virtud del derecho al debido proceso, principios como el de legalidad, contradicción, defensa y que se conozcan las actuaciones de la administración, de cuya aplicación se derivan importantes consecuencias para las partes involucradas en el respectivo proceso administrativo. Así lo expuso la **Sentencia C-331 de 2012**.

' (i) el acceso a procesos justos y adecuados (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas, (iii) los principios de contradicción e imparcialidad y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos con el fin de evitar

8

4/4/12



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

AUTO

posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administracion a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. Igualmente esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares

Desde la perspectiva de los asociados de este derecho se desprenden las garantías de (i) conocer las actuaciones de la administracion, (ii) pedir y controvertir las pruebas (iii) ejercer con plenitud su derecho de defensa, (iv) impugnar los actos administrativos y (v) gozar de las demás garantías establecidas en su beneficio. En lo que respecta a la administración, todas las manifestaciones del ejercicio de la función pública administrativa se encuentran cobijadas por el debido proceso tales como (i) la formación y ejecución de actos administrativos (ii) las peticiones presentadas por los particulares, y (iii) los procesos que se adelanten contra la administracion por los ciudadanos en ejercicio legítimo de su derecho de defensa (Subraya fuera de texto)

- 11 Que en este ente de fiscalización departamental obra el expediente que da cuenta de la Actuación Administrativa No 0941-2020, en el cual constan las diligencias y actuaciones administrativas relacionadas con el procedimiento administrativo sancionatorio por afectación al impuesto al consumo iniciado en contra de los señores DAGOBERTO HERNANDEZ CARO, identificado con cédula de ciudadanía n° 8429239 y JUAN BERRIO SALGUEDO, identificado con cédula de ciudadanía n° 8 332 612
- 12 Dicho procedimiento tuvo origen en la visita de inspección y vigilancia efectuada el 18 de diciembre de 2020, por el Grupo de Operativos de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, al establecimiento de comercio abierto al público denominado Granero El Paisaje Tutumefío, ubicado en la calle 20 n° 19 - 72, del municipio de Necoclí - Antioquia, se le realizó aprehensión al señor DAGOBERTO HERNANDEZ CARO y JUAN BERRIO SALGUEDO, de 37 cigarrillos por los cuales presuntamente no se presentó declaración ni se acreditó el pago del impuesto al consumo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 207 y 215 de la Ley 223 de 1995, los artículos 2 2 1 2 1 y 2 2 1 2 15 del Decreto No 1625 de 2016, y artículo 152, numeral 4, literal a), Ordinales I y V, de la Ordenanza No 029 de 2017
- 13 Que la anterior Actuación Administrativa por parte de la Autoridad de Fiscalización Departamental dio lugar al Acta de Aprehensión No 2020 0590 0938 del 18 de diciembre de 2020
- 14 La mercancía aprehendida en la mencionada diligencia fue la siguiente

n °	TIPO DE MERCANCIA	MARCA	PRESENTACION	TOTAL DECOMISADO
1	Cigarrillos	Rumba	Cajetilla x 20	37
TOTAL				37



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

AUTO

- 15 En la presente Actuacion Administrativa reposan como elementos de conviccion los siguientes documentos los cuales conducen a inferir la existencia de una contravencion al Estatuto de Rentas del departamento de Antioquia
- 15 1 Acta de Aprehension No 2020 0590 0938 del 18 de diciembre de 2020
 - 15 2 Certificado de antecedentes de la Procuraduria General de la Nacion correspondiente a los señores, Dagoberto Hernandez Caro, identificado con cedula de ciudadanía n° 8429239 y Juan Berrio Salgado, identificado con cedula de ciudadanía n° 8332612
 - 15 3 Consulta realizada en el Registro Unico Empresarial y Social -RUES- correspondiente a los señores, Dagoberto Hernandez Caro, identificado con cedula de ciudadanía n° 8429239 y Juan Berrio Salgado, identificado con cedula de ciudadanía n° 8332612
 - 15 4 Copia del certificado de la base gravable por cajetilla de 20 unidades, para la liquidacion del componente ad valorem del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, durante el año 2020, expedido por el DANE
 - 15 5 Informe de Averiguaciones Preliminares n° 2021020045869 del 27 de agosto de 2021
- 16 Mediante el Auto No 2021080006981 del 19 de noviembre de 2021, el ente de fiscalizacion departamental resolvió iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio por afectacion al impuesto al consumo en contra de la persona natural en mencion, para establecer los hechos u omisiones que constituyen infraccion a la Ley 1762 de 2015 y a las normas que regulan las rentas departamentales, en especial las alusivas al impuesto al consumo
- 17 Se prorriera Auto No 2025080544681 del 01 de agosto de 2025, por medio del cual se apertura el periodo probatorio, se decreta pruebas y se corre traslado para la presentacion de alegatos de conclusion
- 18 Al revisar integramente el expediente que contiene la presente investigacion de caracter sancionatoria, se encontro que por error el Auto n° 2021080006981 del 19 de noviembre de 2021, mediante el cual el ente de fiscalizacion departamental resolvió iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio por afectacion al impuesto al consumo en contra de las personas naturales señores DAGOBERTO HERNANDEZ CARO y JUAN BERRIO SALGUEDO, no ha culminado el proceso de notificacion
- 19 Teniendo en cuenta lo anterior, el Auto N° 2025080544681 del 01 de agosto de 2025, debera ser revocado, para finalizar la notificacion en debida forma
- 20 En consecuencia, el Auto No 2021080006981 del 19 de noviembre de 2021, tendra plena validez dentro del presente proceso sancionatorio y debera notificarse en debida forma, con la finalidad de garantizarle el debido proceso y el derecho de defensa y

2

4/4



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

AUTO

contradicción a los investigados, señores DAGOBERTO HERNANDEZ CARO y JUAN BERRIO SALGUEDO

- 21 El artículo 29 de la Constitución Política Nacional dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado en las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T - 391 de 1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo alcance en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales para agotar el respectivo trámite.
- 22 El debido proceso se ve afectado cuando el funcionario judicial o el instructor del procedimiento administrativo sancionatorio se aparta del proceso legalmente establecido, ya sea porque sigue un proceso distinto al aplicable o porque omite una etapa sustancial del mismo, lo cual desconoce el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso. De acuerdo con la Sentencia SU -159 de 2002, este último evento se presenta cuando la ausencia de una etapa procesal o de alguna formalidad desconoce las garantías previstas en la ley para los sujetos procesales, de forma tal que, por ejemplo, se impide que *"(i) puedan ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado - en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes para sustentar su posición, (ii) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su participación en el mismo y (iii) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles notificadas"*, entre otras.
- 23 En este sentido, la Corte ha señalado que en todo proceso judicial o administrativo es constitucionalmente imperioso que la persona contra la cual se dirige un cargo o acusación pueda hacer frente a los reproches formulados en su contra y que los argumentos que presente se consideren en la respectiva actuación judicial o administrativa, pues esto no solo sirve al interés individual del mismo, sino también al esclarecimiento de la verdad.
- 24 De ahí que, independientemente de que la actuación administrativa se inicie en cumplimiento de un deber constitucional o de oficio, todas las garantías constitucionales son exigibles, pues ese hecho no afecta su naturaleza, ni podrá entenderse que los obligados tengan restricciones en cuanto al contenido y alcance del derecho al debido proceso administrativo, por lo que corresponde a las autoridades promover y garantizar los derechos de las personas (artículo 2° de la C P). En efecto, uno de los contenidos del derecho al debido proceso se circunscribe a que las personas conozcan y comprendan el trámite administrativo en el que se encuentran involucradas.
- 25 Por tanto, las autoridades administrativas deben garantizar en virtud del derecho al debido proceso, principios como el de legalidad, contradicción, defensa y que se conozcan las actuaciones de la administración, de cuya aplicación se derivan

[Firma manuscrita]



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

AUTO

importantes consecuencias para las partes involucradas en el respectivo proceso administrativo. Así lo expuso la **Sentencia C-331 de 2012** "(i) el acceso a procesos justos y adecuados, (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas, (iii) los principios de contradicción e imparcialidad, y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. Igualmente, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares"

Desde la perspectiva de los asociados de este derecho se desprenden las garantías de (i) conocer las actuaciones de la administración, (ii) pedir y controvertir las pruebas, (iii) ejercer con plenitud su derecho de defensa, (iv) impugnar los actos administrativos y (v) gozar de las demás garantías establecidas en su beneficio. En lo que respecta a la administración todas las manifestaciones del ejercicio de la función pública administrativa se encuentran cobijadas por el debido proceso tales como (i) la formación y ejecución de actos administrativos, (ii) las peticiones presentadas por los particulares y (iii) los procesos que se adelanten contra la administración por los ciudadanos en ejercicio legítimo de su derecho de defensa (Subraya fuera de texto)

- 26 Cabe resaltar que, para ejercer el derecho a la defensa de forma material y no solo formal, es indispensable que la persona tenga conocimiento de la actuación administrativa, de las etapas en las que se desarrolla la misma y su alcance. Una de las garantías mínimas del debido proceso es el ejercicio de defensa y contradicción, a ser oído y a promover la nulidad de aquellas que se obtienen con violación al debido proceso.
- 27 Aunado a lo anterior, el ejercicio de la función administrativa por parte de la Autoridad de Fiscalización Departamental, deberá garantizar que en todas sus actuaciones se respeten y se observen íntegramente los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad para en procura del orden e interés general, razón por la cual, la situación descrita anteriormente atenta directamente contra los principios mencionados.

En mérito de lo expuesto, la Secretaría de Despacho de la Secretaría de Hacienda del departamento de Antioquia,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO DEJAR SIN EFECTO el Auto No 2025080544681 del 01 de agosto de 2025, por el cual se apertura el periodo probatorio, se decreta pruebas y se corre traslado



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

AUTO

para la presentacion de alegatos de conclusion, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo



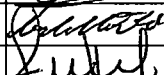
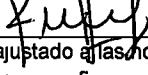
ARTICULO SEGUNDO Notificar al señor DAGOBERTO HERNANDEZ CARO, identificado con la cedula de ciudadanía n° 8429239 y JUAN BERRIO SALGUEDO, identificado con cedula de ciudadanía n° 8 332 612, el Auto n° 2021080006981 del 19 de noviembre de 2021, conforme a lo expuesto en la parte motiva

ARTICULO TERCERO Notificar el presente auto al investigado o a su apoderado legalmente constituido, conforme lo establece los articulos 565 y siguientes del Decreto Ley 624 de 1989 "Estatuto Tributario Nacional"

ARTICULO CUARTO Indicar que contra la presente actuacion administrativa no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 1762 de 2015

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE


OFELIA ELCY VELASQUEZ HERNANDEZ
SECRETARIA DE DESPACHO
SECRETARIA DE HACIENDA

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyecto	Michelle Katherine Arango Cardona / Abogada Apoyo de Sustanciación		12/08/25
Revisó	Juan José Ríos / Abogado Apoyo de Sustanciación		12/08/25
Revisó	Carlos Alberto Toro Ramírez / Abogado de Despacho		13/08/25
Aprobó	Jorge Enrique Cañas Giraldo/ Subsecretario de Ingresos		12/08/25
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y los encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			